



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral
Radicación: 05088-31-05-002-2022-00449-01
Demandante: Oscar Guzmán Valencia
Demandado: Correa Arroyave y CIA SCA en Liquidación
Asunto: Apelación sentencia
Procedencia: Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello
Magistrada ponente: Sandra María Rojas Manrique
Temas: Relación Laboral

Medellín, septiembre veintisiete (27) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello, el 17 de agosto de 2023, en el proceso ordinario laboral de primera instancia, instaurado por el señor OSCAR GUZMÁN VALENCIA en contra de la sociedad CORREA ARROYAVE Y CIA SCA EN LIQUIDACIÓN. Radicado 05088-31-05-002-2022-00449-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor OSCAR GUZMÁN VALENCIA, llamó a juicio a la sociedad CORREA ARROYAVE Y CIA SCA EN LIQUIDACIÓN, pretendiendo se declare la existencia entre las partes de un contrato de trabajo verbal a término indefinido, desde el 26 de mayo de 1997 hasta el 13 de mayo de 2022, el cual terminó por la comunicación de la cesación de sus funciones como revisor fiscal, en consecuencia, se condene a la demandada al pago de vacaciones y prestaciones sociales causadas durante la vigencia de la relación laboral, se condene al reembolso de los porcentajes de cotización correspondientes al 8.5% por salud y 12% por pensión durante todo el tiempo, con su respectiva indexación y los intereses, igualmente, se condene al pago de la sanción moratoria dispuesta en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo y la sanción del numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

En respaldo de tales pedimentos, se expuso, que el señor Oscar Guzmán Valencia prestó sus servicios personales a la empresa Correa Arroyave y CIA SCA en Liquidación, desde el 26 de mayo de 1997 hasta el 13 de mayo de 2022, siendo designado por Acta N° 10 del 26 de mayo de 19997, reelegido el 29 de marzo de 2000, sin que se suscribiera entre las partes ninguna clase de contrato escrito, ni laboral, ni civil, ni comercial, sosteniendo que a partir de la designación como revisor fiscal, se inició entre las partes una relación laboral subordinada, asignándose una oficina en las sedes sociales ubicadas en la diagonal 51 N° 15 A 161 Bello-Antioquia y en la carrera 43 A 1 A Sur 69 Medellín, siendo la última remuneración de \$945.520 y con un horario de trabajo de tres horas aproximadamente, las cuales se prestaban entre las 9:00 am. y 12 m de lunes a viernes.

Se expuso que ejerció las funciones como revisor fiscal, las cuales no solo estaban supeditadas a las contempladas por el artículo 207 y siguientes del Código de Comercio, sino que también obedecían los parámetros que le fueron encomendados al momento de su designación por la Asamblea General de Accionistas, bajo la subordinación y dependencia del presidente de la misma, el gerente y representante legal, así como del liquidador Stephan Correa Castaño y del señor Orlando Antonio Jaramillo Tamayo, director administrativo de la sociedad, aclarando que entre los años 1997 a 2013, el representante legal y socio gestor, señor Juan Rigoberto Correa, no solo le solicitaba estados financieros para presentar a la junta directiva, sino que le ordenó viajar a Costa Rica, donde tiene inversiones en la sociedad Siglo Tercero y viajar a Bogotá, para todo lo relacionado con la inversión Casa Bonita, y otros temas relacionados con las sociedades de la comunidad societaria Correa Castaño tales como Inversiones Futuro Verde S.A.S., Beagles and Brunch S.A. y Vastecor S.A.S. Entre los años 2013 a 2022, el representante y liquidador de la sociedad, Stephan Correa Castaño, le solicitaba los estados financieros.

Se narró que la remuneración recibida por el actor era reconocida por la sociedad demandada a título de honorarios para evitar el pago de aportes parafiscales y la seguridad social, vulnerando sus derechos, exigiéndose la presentación de informes y cuentas de cobro mensualmente para el pago de los salarios, debiendo sufragar siempre con su propio peculio los aportes a seguridad social.

1.2.- CONTESTACIÓN

Al replicar la demanda, la sociedad **CORREA ARROYAVE Y CIA SCA EN LIQUIDACIÓN**, por intermedio de apoderado aceptó como cierta la prestación personal del servicio entre el 26 de mayo de 1997 y el 13 de mayo de 2022, aclarando que la gestión del actor se dio como consecuencia del contrato de prestación de servicios donde fue contratado como revisor fiscal,

admitió como cierta la remuneración y que el señor Stephan Correa Castaño, como representante y liquidador de la compañía le solicitaba estados financieros de la sociedad, actos de supervisión, que lo que buscan es constatar el cumplimiento de las obligaciones convenidas. Sostuvo que no le consta que señor Juan Rigoberto Correa, diera órdenes al demandante y que no son ciertos los demás hechos, teniendo en cuenta que no existió relación laboral, ni subordinación, destacando que el demandante no contaba con un espacio físico en las instalaciones de la entidad ubicándose en la mayoría de eventos en las oficinas y escritorios del gerente, representante legal o el contador.

En oposición al éxito de las pretensiones formuló las excepciones de inexistencia de la obligación; inexistencia del vínculo laboral; compensación; buena fe; prescripción; enriquecimiento sin justa causa; mala fe del demandante y la genérica.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

Mediante fallo proferido el 17 de agosto de 2023, el Juzgado de conocimiento absolvió a la sociedad Correa Arroyave y CÍA SCA en Liquidación de todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra por el señor Oscar Guzmán Valencia, e impuso condena en costas al demandante.

1.4.- RECURSO

Inconforme con la decisión el apoderado del demandante interpone recurso de apelación, señalando el carácter laboral del contrato del demandante, relevando que no aparece contrato escrito de prestación de servicios, ni actas, ni ningún documento que dé cuenta que se hubiera celebrado esta clase de contrato, expone que conforme al artículo 24 se presume la existencia del contrato de trabajo y a pesar de que se diga que no está contemplada la exigencia de que esta clase de contratos se celebren por escrito, el artículo 46

de la Ley 43 de 1990, regula que todo contrato debe ser por escrito, lo cual afirma tiene respaldo en diversos conceptos del Consejo de Estado, de la Procuraduría General de la Nación, del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, del Ministerio de Trabajo y de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En relación a la subordinación refiere que el demandante también tenía subordinación respecto de la Asamblea General de Accionistas, que el mismo liquidador de la empresa aceptó que le daba órdenes, además en la contestación de la demanda se dicen que esas órdenes eran funciones de control y supervisión, es decir que la demandada ejercían control y supervisión sobre las obligaciones, funciones, deberes y compromisos del demandante, podía verificar el desempeño de las mismas y controlaban su trabajo y actividad profesional, por lo hay una relación de subordinación.

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunció el apoderado del **demandante**, reiterando los fundamentos que dieron lugar a la presentación de la demanda e insistiendo en los argumentos expuesto en la sustentación del recurso de alzada a fin de que se revoque la sentencia de primera instancia, en tanto que se acreditó la existencia de la subordinación propia de un contrato laboral, siendo procedente que se acceda a las pretensiones de la demanda.

Por su parte, el apoderado de la sociedad **demandada**, solicita se mantenga incólume la sentencia, teniendo en cuenta que el material probatorio allegado al proceso, logró acreditar la existencia de un vínculo civil, en virtud de un contrato de prestación de servicios, quedando desvirtuadas las órdenes y que lo que se pedía al demandante eran los informes que dieran cuenta del

cumplimiento de sus funciones, conforme a los tiempos en los que normalmente los revisores fiscales deben presentarlos para el desarrollo de las asambleas o requerimientos de autoridades administrativas, siendo ello parte del ejercicio ordinario de las funciones señaladas en el artículo 207 del Código de Comercio.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación por el señor ***Oscar Guzmán Valencia***, entendiendo que las partes quedaron de acuerdo con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

2.2.- PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Es procedente revocar la sentencia proferida por el Juez Segundo Laboral del Circuito de Bello, determinando para tal fin, si entre el señor Oscar Guzmán Valencia y la sociedad Correa Arroyave y Cía SCA en Liquidación existió una relación de carácter laboral, del 26 de mayo de 1997 al 13 de mayo de 2022, caso en el cual deberá determinarse si hay lugar al pago de las prestaciones sociales, vacaciones, reembolso de aportes a la seguridad social, la indemnización por no consignación en un fondo del auxilio de cesantías y la indemnización del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo?

2.3.- TESIS

El problema jurídico planteado se resuelve bajo la tesis según la cual la relación que unió a las partes no tiene carácter laboral, en tanto no se acreditan los elementos propios del contrato de trabajo y fue desvirtuada la presunción de subordinación que amparaba al demandante, contrario a ello, se acreditó la existencia de un contrato de prestación de servicios, que no se rige por las normas del Código Sustantivo de Trabajo, en consecuencia, la sentencia debe ser CONFIRMADA.

2.4.- PREMISAS NORMATIVAS

El contrato realidad

El concepto de contrato realidad tiene fundamento en el principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formas que eligen las partes en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, de donde se concluye que con independencia de la denominación del contrato, lo que determina el surgimiento de los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador, lo es la confluencia de los elementos que definen el contrato de trabajo, establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo.

Conforme a la citada norma, son tres los elementos que permiten la configuración de un contrato de trabajo, el primero, la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; el segundo, la continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, lo cual debe mantenerse por todo el tiempo o duración del contrato y el tercer elemento, el salario como retribución del servicio.

El artículo 24 ibídem, modificado por el artículo 2 de la Ley 50 de 1990, consagra una presunción legal del elemento subordinación, una vez acreditada la prestación personal del servicio:

“ARTICULO 24. PRESUNCIÓN. Modificado por el art. 2, Ley 50 de 1990. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.”

En desarrollo de tal presunción, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha estructurado una línea jurisprudencial pacífica y uniforme, en torno a cómo se distribuyen las responsabilidades probatorias entre el empleador y el trabajador, criterio expuesto entre otras, en las sentencias SL39259 del 17 de abril de 2013, SL4027 del 08 de marzo de 2017 y más recientemente en sentencia SL 2295 del 24 de mayo de 2022, así:

“Lo anterior significa, que al actor le basta con probar la prestación o la actividad personal, para que se presuma el contrato de trabajo y es a la empleadora a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción con la que quedó beneficiado el operario.”

Igualmente, en sentencia del 14 de febrero del 2018, la Corte Suprema de Justicia, SL1021-2018 (45430), recordó que tratándose de profesiones liberales aplica igualmente la presunción del contrato de trabajo:

“Aunque el inciso 2 del artículo 2 de la Ley 50 de 1990, intentó modificar tal figuración jurídica, al introducirle una modificación al anterior precepto, según la cual «quien habitualmente preste sus servicios personales remunerados en el ejercicio de una profesión liberal o en desarrollo de un contrato civil o comercial, pretenda alegar el carácter laboral de su relación, deberá probar que la subordinación jurídica fue la prevista en el literal b) del artículo 1 de esta ley y no la propia para el cumplimiento de la labor o actividad contratada», lo cierto es que fue apartado del ordenamiento, a través de la sentencia de inexequibilidad CC C-665/1998, al estimarse que tal contenido quebrantaba el criterio de igualdad, angular en la estructura constitucional que irradia a la ley del trabajo y que por tanto era inadmisile...”

Ahora bien, el trabajo humano, en todas sus formas, goza de la especial protección del Estado (artículo 25 de la Constitución Política), pero los

principios que gobiernan el derecho sustantivo laboral, no son aplicables a aquellos trabajos que están por fuera del escenario de subordinación, como ocurre frente a contratos de carácter civil o comercial.

2.5.- CASO CONCRETO

En el asunto sometido a consideración de la Sala, no hay duda alguna que el señor Oscar Guzmán Valencia, prestó sus servicios personales a la sociedad Correa Arroyave y Cía. SCA en Liquidación, como revisor fiscal, entre el 26 de mayo de 1997 y el 13 de mayo de 2022, hecho aceptado por la sociedad accionada al dar respuesta a la demanda y ratificado por el liquidador de la sociedad al momento de absolver el interrogatorio de parte.

Así las cosas, acreditada la prestación del servicio, se activa en favor del demandante la presunción contenida en el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo, correspondiendo al empleador desvirtuar dicha presunción y acreditar la existencia de un vínculo contractual diferente al laboral, recordando igualmente, que la Sala de Casación Laboral de Corte Suprema de Justicia, también ha adocinado, que si bien al trabajador le basta probar la prestación del servicio, para que se presuma la subordinación, ello no lo exime de otras cargas probatorias, como lo son acreditar los extremos temporales de la relación, el salario, la jornada laboral (sentencia SL, radicado 36549 de 2009).

En el sublite, concluyó el funcionario de primera instancia, que de la prueba allegada al plenario, que no es posible establecer que la demandada haya ejercido una potestad subordinante frente al gestor del proceso, circunstancia que permite determinar que hay ausencia de ese elemento de subordinación, demostrándose que la labor se realizó de forma autónoma e independiente, por el contrario, la parte activa, considera que si se encuentra acreditada la subordinación y por ende, la existencia de la relación laboral alegada.

Bajo el anterior escenario incumbe a la Sala establecer, si en efecto, la pasiva desvirtuó la presunción de subordinación a la cual se hizo referencia, destacando en primer lugar, que el demandante al rendir el interrogatorio de parte manifestó que atendía a toda la familia Correa Arroyave y Correa Castaño, que cada compañía lo contrataba de forma independiente, aunque no existió contrato escrito, mencionando entre las sociedades contratantes a Inversiones Horizontes, Alfa Ganadera, Conalfastos y Correa Arroyave, aduciendo que su jornada laboral era en las mañanas y que en la misma oficina estaba dispuesto para todas las sociedades, afirmando que del año 1997 a 2013 estuvo subordinado por el señor Juan Correa que es el socio gestor, por Stephan quien le solicitaba estados financieros al igual que Orlando Jaramillo por solicitud de Juan Correa. De lo anterior, se tiene que el actor ejerció funciones de revisor fiscal simultáneamente para varias sociedades, entre ellas la sociedad demandada Correa Arroyave y Cía SCA en Liquidación.

Por su parte, el señor Stephan Correa Castaño, liquidador de la sociedad accionada, tal y como se indicó en líneas precedentes, reconoció la prestación del servicio por parte del actor en los extremos reclamados y que como liquidador le exigía al actor estados financieros de la entidad, sin incurrir en ninguna otra confesión.

La sociedad demandada presentó como testigos al señor Orlando de Jesús Jaramillo Tamayo, director administrativo de Correa Arroyave y Cía SCA en Liquidación y al socio Juan Rigoberto Correa Arroyave, quienes de manera uniforme manifestaron que el demandante fue el revisor fiscal de la sociedad, que no debía cumplir horarios, no tenía asignada una oficina o espacio en las instalaciones de la sociedad, que se le cancelaban honorarios que era elección del pretensor el lugar desde el cual prestaba los servicios y que no se le daba ningún tipo de órdenes, solo instrucciones relacionadas con la labor de revisoría fiscal, además de corroborar que el señor Oscar Guzmán prestaba sus servicios como revisor fiscal en otras sociedades.

Advirtiendo la Sala, que a partir de la declaración de los señores Orlando de Jesús Jaramillo Tamayo y Juan Rigoberto Correa Arroyave, puede colegirse que la sociedad demandada no ejercía subordinación alguna sobre el demandante, máxime cuando niegan que cada uno en sus calidades de liquidador o socio gestor impartieran órdenes al señor Guzmán Valencia,

Relieva la Sala, que los testigos presentados por la parte demandante no aportan elementos de convicción que respalden las aspiraciones del actor, pues ni el señor **Diego Armando Guzmán Valencia**, hermano del demandante y auxiliar contable de la empresa, ni el señor **Iván de Jesús Bolívar Vásquez**, quien fue empleado de Conalfastos, conocen detalle de la relación existente entre las partes, limitándose de manera exclusiva a señalar que lo conocían como revisor fiscal del grupo Correa y que lo veían en las oficinas de la empresa, aclarando el señor Bolívar Vásquez, que eran las oficinas de Conalfastos, siendo reiterativos los testigos en decir que veían al demandante en la oficina, pero que no saben si ese tiempo lo dedicaba exclusivamente al servicio de la sociedad Correa Arroyave y Cía SCA en Liquidación, pues, tal y como quedó acreditado, el pretensor ejercía como revisor fiscal de varias sociedades, resaltando, que, en relación al horario de trabajo, resulta contradictoria la versión del señor Iván de Jesús Bolívar Vásquez, pues manifestó que veía al demandante en la oficina desde las 8:00 am en adelante y hasta la 1:00, 2:00, 3:00 o 4:00 pm. Cuando el propio demandante señaló que el horario en oficina lo cumplía en la mañana, hasta el mediodía y en las tardes solo si lo llamaban a reuniones.

Debe indicarse igualmente, que la prueba documental allegada, específicamente los correos electrónicos obrantes a folios 40 a 60 del expediente digital, son indicativos de la prestación del servicio del actor, hecho que no estaba en discusión, sin que de los mismos se pueda predicar la configuración de un poder subordinante respecto de la sociedad Correa

Arroyave y Cía SCA en Liquidación, sin que fuera objeto del litigio la prestación de servicio por parte del actor a otras sociedades del grupo Correa Arroyave o a los socios de las mismas, quienes no son parte en el proceso.

Sumado a lo anterior, se tiene que conforme a la regulación del Código de Comercio, el cargo de revisor fiscal, requiere de un alto grado de independencia, teniendo en cuenta que ejerce funciones de control, razón por la cual, la regla general, es que la revisoría fiscal se lleve a cabo por personal externo, relievando que el artículo 205 del Código de Comercio, señala expresamente como inhabilidades del revisor fiscal, desempeñar en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier otro cargo, con lo cual se busca precisamente garantizar la autonomía de quien ejerce la función.

Asimismo, el artículo 207 del citado estatuto, establece como funciones del revisor fiscal, las siguientes:

- “1) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva;*
- 2) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios;*
- 3) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías, y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados;*
- 4) Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines;*
- 5) Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título;*

- 6) *Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales;*
- 7) *Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente;*
- 8) *Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario, y*
- 9) *Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios.*
- 10) *Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones catalogadas como sospechosas en los términos del literal d) del numeral 2 del artículo 102 del Decreto-ley 663 de 1993, cuando las adviertan dentro del giro ordinario de sus labores*

En armonía con lo señalado, se tiene que en el Acta General de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas N° 10, del 26 de mayo de 1997, de la sociedad Correa y Arroyave y CÍA S.C.A., en la cual se designó como revisor fiscal al pretensor, se estipularon las funciones del revisor fiscal en los términos del citado artículo 207 del Código de Comercio, sin que en el plenario, se probara que el señor Guzmán Valencia, hubiere desarrollado actividades diferentes o adicionales en favor de la sociedad accionada.

De otra parte, en relación a la función de revisoría fiscal, la Corte Constitucional, en sentencia C-076 de 2021, sostuvo lo siguiente:

“Conforme a lo expuesto, la revisoría fiscal se desarrolla en dos facetas -fedataria y de fiscalización- que se ejercen en forma independiente y permanente respecto de la persona jurídica objeto de inspección y vigilancia. Estas funciones son expresión del alto grado de confianza que la sociedad y las autoridades depositan en los revisores fiscales, de quienes, en contraprestación, se espera la mayor diligencia en la ejecución de sus labores, habida cuenta del impacto y trascendencia de su gestión, a tal punto que el incumplimiento de sus deberes puede conllevar, no solo responsabilidad civil, sino también administrativa, disciplinaria y penal. Los revisores fiscales son garantes ante el Estado, la colectividad y los dueños de la empresa de la veracidad de las

operaciones que certifican y de la legalidad de actuaciones que vigilan; y su función repercute en el aseguramiento del orden público económico nacional”.

En igual sentido, en sentencia C-788 de 2009, expuso la Alta Corporación:

“5.3.- Por su naturaleza, la revisoría fiscal se enmarca dentro de los procesos de control y supervisión interna de las empresas, de manera que quien la ejerce no representa ni a los socios ni a la sociedad como tal, sino que sus funciones se proyectan en una dimensión mucho más amplia. Al respecto, en la Sentencia C-780 de 2001, reiterada en la Sentencia C-621 de 2003, esta Corporación explicó lo siguiente:

“4.- La revisoría fiscal participa en el cumplimiento de las funciones y fines del Estado, razón por la cual se le impone el ejercicio de una labor eficaz, permanente, integral, independiente, oportuna y objetiva, con el fin de garantizar e incentivar la inversión, el ahorro, el crédito y, en general, la promoción del desarrollo económico.

Su actuación no se limita a dar seguridad a los propietarios de las empresas acerca del cumplimiento de las normas legales y estatutarias por parte de la administración y de la conservación de los bienes de la sociedad (art. 207 C. Co). Le corresponde también la protección de los intereses de terceros, representados en la confianza y la certeza sobre el respaldo y el manejo del crédito y del ahorro por parte de la entidad financiera”.

De lo anterior, se colige que la actividad de revisoría fiscal, dada la naturaleza del cargo y la función de control y vigilancia, aconseja que quien la realiza no se encuentre bajo subordinación de la sociedad y cuente con la autonomía e independencia suficiente para cumplir con su finalidad, advirtiendo que dicha situación no se opone a que pueda celebrarse un contrato de trabajo o pueda configurarse una verdadera relación laboral, no obstante, no se logra acreditar que tal situación se hubiera presentado en el caso analizado.

Por último, se advierte que la falta de un contrato escrito, no puede llevar a concluir que el contrato fuera de naturaleza laboral o que no existió un contrato civil, como lo argumenta el recurrente, pues ambos contratos pueden

ser consensuales. A este respecto, es pertinente señalar que el artículo 46 de la Ley 43 de 1990, *“por medio de la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones”* citado por el recurrente no consagra la exigencia del contrato escrito de revisoría fiscal, pues se refiere exclusivamente al pacto de honorarios con el contador público.

Las razones precedentes, conducen a que la Sala, dando primacía a la realidad, concluya que la relación contractual entre las partes estuvo regida por un contrato verbal de prestación de servicios y consecuentemente desestime el recurso de alzada presentado por el apoderado de la parte actora, debiéndose imprimir confirmación a la providencia de primera instancia.

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente, inclúyase como agencias en derecho la suma de \$1.160.000.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **CONFIRMA** la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello, el 17 de agosto de 2023, en el proceso ordinario instaurado por el señor OSCAR GUZMÁN VALENCIA en contra de la sociedad CORREA ARROYAVE Y CIA SCA EN LIQUIDACIÓN, conforme lo expuesto en la parte motiva.

2.- Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante, inclúyase como agencias en derecho la suma de \$1.160.000

3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.


El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO